



Migrar y morir en el intento

(Tonatiuh Guillén López, pág. 44 y 45)

Durante años la migración internacional irregular ha tenido muchas víctimas en todas las latitudes del planeta, precisamente debido a las condiciones vulnerables y clandestinas de esa movilidad. Desgraciadamente, morir en la ruta migratoria se ha convertido en un evento común, en ocasiones tan repetido que ha vuelto insensibles a gobiernos y a no pocas sociedades. Del Mediterráneo al río Bravo o de África y Oriente Medio a Europa, prácticamente todos los días hay fallecimientos en condiciones terribles: por ahogamiento, deshidratación, hipotermia, asesinatos, accidentes, enfermedades... Todos los días, todas las edades, todas las tragedias posibles.

Migrar en condiciones irregulares y con todos los riesgos no es una decisión simple. Cada vez más es una alternativa de vida en el sentido más elemental del término. La motivación laboral y por un mejor ingreso –como fue durante largo tiempo la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, por ejemplo– ha cedido su lugar a la búsqueda de protección internacional, lo cual es hoy el asunto central de lo que transcurre en nuestro continente y otras partes del mundo. La búsqueda de refugio en otro país es actualmente el nudo mayor de la migración internacional irregular. Se huye de la violencia, la persecución, el acoso, la discriminación, la pobreza, la falta de oportunidades de vida digna, de gobiernos irresponsables y élites políticas y económicas abusivas y autoritarias. Migrar dejó de ser optativo y se convirtió en una necesidad urgente, vital, para niños, niñas y jóvenes inclusive.

Por estas condiciones, especialmente en la frontera sur de México, muchas veces migración y refugio tienden a ser sinónimos, se fusionan como una sola palabra para la mayoría de las personas procedentes del norte de Centroamérica y especialmente de Honduras. Los centroamericanos que están llegando a México tienen entre sus motivos de salida necesidades de protección pues su vida corre peligro en sus países de origen. Son personas refugiadas y los instrumentos internacionales las protegen: la Convención de 1951 y la Declaración de Cartagena. Por consiguiente, en México progresivamente la política de Estado apropiada es la basada en la Ley de Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político y no en una sesgada selección de normas de contención migratoria de la Ley de Migración. El evento social que transcurre en nuestras fronteras tiene un elevado componente de refugio y no simplemente de migrantes irregulares. Por eso es esencial que las personas puedan solicitar asilo en las fronteras mexicanas, y evitar que corran riesgos innecesarios al aventurarse a cruzar el territorio nacional hasta llegar a una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).



Política de incertidumbre ante el Covid-19

(Juan Carlos Cruz Vargas, pág. 6-9)

Sumida en su parálisis, la economía mexicana se enfrenta a un “territorio desconocido” –como lo llamó el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León– con el contagio del coronavirus, que ya llegó al país. Las autoridades del sector salud carecen de un plan de contingencias para evitar que la actividad económica y las finanzas públicas sufran una merma aún mayor. La semana pasada la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el peso tuvieron su peor momento en lo que va del año. El Índice de Precios y Cotizaciones cerró con un desplome semanal de 7.76% con un total de 41 mil 324 puntos, un descenso no visto desde la crisis financiera de 2008.

La divisa nacional se fue en picada con un retroceso acumulado de 5.28%, de forma que el tipo de cambio se acercó a los 20 pesos por dólar en ventanillas bancarias, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador confirmó el primer caso de Covid-19. Así, el peso acumuló siete jornadas consecutivas en caída libre frente al dólar estadounidense y fue una de las monedas emergentes más afectadas por la incertidumbre, igual que el rand sudafricano y el real brasileño.

Brotan de la nada las proveedoras de la 4T

(Esteban David Rodríguez y QUINTO ELEMENTO LAB, pág. 12-15)

Ana Gabriela Guevara se convirtió en la velocista más exitosa de México al romper récords mundiales hace casi 20 años, antes de que se retirara del atletismo y brincara a la arena política. Hoy, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que dirige la exmedallista olímpica intenta batir otras marcas: otorgar con suma rapidez contratos directos a empresas que tienen menos de dos meses de nacidas. La excampeona no es la única funcionaria que está haciendo ese *sprint*: el fenómeno está extendido prácticamente por todo el nuevo gobierno lopezobradorista. Durante el primer año del sexenio surgieron empresas que antes no existían y, creadas casi ‘al vapor’ a la par que arrancaba la Administración federal, fueron favorecidas rápidamente con contratos otorgados por casi un centenar de dependencias públicas.

Una investigación desarrollada por Quinto Elemento Lab encontró que una colmena de 171 compañías creadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 recibió durante el primer año de gobierno transferencias económicas por un monto global de 366 millones de pesos (mdp) por parte de 92 dependencias de la Administración de Andrés Manuel López Obrador. En total, estas compañías captaron 561 contratos gubernamentales durante el primer año de gobierno, y siete de cada diez fueron adjudicados directamente por las dependencias, es decir, sin que mediara una convocatoria pública, de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet.



Los uniformes de la Guardia Nacional, con raíces en Panamá

(Estaeban David Rodríguez, pág. 16-19)

La creación de la Guardia Nacional fue expedita: en noviembre de 2018 el grupo parlamentario de Morena presentó la iniciativa para crear el nuevo cuerpo de seguridad, y para febrero de 2019, el Poder Legislativo ya había aprobado su creación. Casi con la misma rapidez, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) celebró contratos con empresas de reciente creación para dotar a la nueva Guardia Nacional de ropa y protección.

De la veintena de contratos que otorgó durante el primer año de gobierno la Sedena entre compañías creadas en los últimos meses, destacan tres que fueron ganados por la empresa Hollond Solutions Textile, una firma que tiene raíces en Panamá y que obtuvo contratos para fabricar la ropa de la nueva Guardia Nacional así como para la adquisición de chalecos antibalas. Hollond fue montada en México el 10 de enero de 2019 por la firma Agorta, una *off-shore* creada en Panamá. Ganó su primer contrato en junio, y luego siguió otro en octubre y uno más en noviembre, para surtir telas y entretelas así como de chalecos antibalas, por un valor total de casi 8.5 millones de pesos.